

Movimiento obrero y movimientos sociales y políticos en Bolivia: la lucha por una democracia radical

Jeffery Webber

El marco geográfico de la lucha

La Paz, capital de Bolivia, se halla en un profundo valle del corazón de los Andes. La morfología geográfica de la ciudad está claramente marcada por profundas divisiones de clase y el legado de racismo que dejaron las imposiciones coloniales españolas y el posterior colonialismo interno, presente desde la fundación de la República, en 1825. La población indígena —más del 60% de la población, según el censo de 2001— ha sufrido en la parte más baja de una jerarquía social tremendamente abrupta que se va volviendo más blanca en proporción directa al privilegio de clase.

La población vecina de El Alto se extiende al borde del Altiplano desde el que se contempla el valle que acuna a La Paz. Con 700.000 habitantes que viven a 4.000 metros sobre el nivel del mar, El Alto es técnicamente una ciudad distinta de La Paz, pero hace más bien las veces de gran suburbio de chabolas de esta, pues todos los días bajan a ella multitud de trabajadores en busca de empleo precario en la construcción, en la venta o en los servicios. Ambas áreas urbanas están profunda y desigualmente interconectadas desde el punto de vista económico, social y político. El 82% de los alteños, como se llama a los residentes de El Alto, se identifican como indios. El contraste de las jerarquías

• Artículo publicado en *MR*, vol 57, n° 4, septiembre de 2005, pp. 34-48. Traducción de Marco Aurelio Galmarini. Jeffery R. Webber es investigador y docente de ciencias políticas en la Universidad de Toronto. Actualmente reside en Bolivia y es miembro del Nuevo Grupo Socialista canadiense. El autor desea expresar su agradecimiento a Juan Arbona, David Camfield, Linda Farthing, Dianne Feeley y Susan Spronk por sus útiles observaciones.

de clase y de raza entre estas dos ciudades es algo visualmente asombroso. A medida que se baja la montaña desde El Alto hacia el centro de La Paz por la zona sur, las chozas de adobe, las vendedoras ambulantes indígenas y la ausencia de infraestructura urbana básica va poco a poco dando paso a rostros más blancos, edificios más altos, aceras y, finalmente, mansiones y Mercedes.

El Alto fue el epicentro de la Guerra del Gas de septiembre-octubre de 2003, que sacudió el paisaje político boliviano con una fuerza nunca vista desde la revolución nacional de 1952. Los campesinos aimaras del Altiplano, los mineros de la comunidad huanuni del Altiplano, los indios pobres que viven en El Alto y, finalmente, los sectores más pobres de la Paz depusieron al odiado presidente Gonzalo «Goni» Sánchez de Lozada. Incluso algunos paceños de clase media realizaron huelgas de hambre los últimos días de revuelta para expresar su rechazo a la masacre de más de setenta personas de la que Goni era responsable.¹ Pero a falta de un proyecto político de izquierda capaz de hacerse cargo del poder del Estado, las fuerzas populares aceptaron a Carlos Mesa Gisbert, a la sazón vicepresidente, como sustituto de Goni con la esperanza de que cumpliera su promesa de poner en práctica la Agenda de Octubre, que comprendía la nacionalización de la producción y distribución de gas natural, someter a juicio a Goni y reunir una Asamblea Constituyente para refundar el Estado boliviano con el fin de ponerlo al servicio de los intereses de la mayoría, formada por indios pobres.

Por supuesto, Mesa, ex periodista e historiador, no cumplió con la Agenda de Octubre. En cambio, con una retórica dominada por un neoliberalismo melifluido, promovió el proyecto político y económico neoliberal que se iniciara en 1985 bajo el gobierno de Víctor Paz Estensoro.

En respuesta al absoluto incumplimiento con la Agenda de Octubre por parte de Mesa, en 2005 resurgieron las fuerzas populares para impugnar el poder del Estado, primero con la Guerra del Agua de El Alto en enero y marzo y, luego, en una acción más importante, con la Segunda Guerra del Gas, de mayo y junio. El conjunto El Alto-La Paz volvió a ser centro de huelgas, marchas, explosiones de dinamita, enfrentamientos con la policía e intentos de tomar la plaza Murillo, donde está situado el Palacio Presidencial, intentos recibidos con gases lacrimógenos y balas de goma. También hemos sido testigos de la movilización de fuerzas regionales de derechas en el departamento de Santa Cruz bajo la bandera de la «autonomía» y en conjunción con rumores de golpes y disidencias militares. Para entender la complejidad del conflicto actual es preciso remontarse, aunque sea brevemente, a sus raíces históricas.

La renovación de las fuerzas populares y la prolongada crisis del Estado neoliberal

De 1964 a 1982 Bolivia sufrió una serie de golpes y, sobre todo, de dictaduras militares de derecha. En 1982 se restauró el procedimiento democrático gracias

a una meritoria lucha popular. Entonces se hizo cargo del poder del Estado una coalición poco consistente de fuerzas de izquierdas bajo la bandera de Unidad Democrática Popular (UDP). Con la herencia de la extraordinaria deuda acumulada durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), el padecimiento de divisiones internas sin fin, la lucha contra una tremenda hiperinflación y paralizada en buena cantidad de frentes por los esfuerzos obstruccionistas de derecha, el Gobierno de la UDP se vio obligado a convocar elecciones anticipadas en 1985, tras lo cual se abrió un periodo de hegemonía neoliberal (1985-2000).

Los quince años de «democracia pactada» —una serie de gobiernos formados apresuradamente por coaliciones de partidos de derecha con rivalidades de toda la vida— se vieron reforzados por los militares, por un entorno internacional amistoso de poderes imperialistas e instituciones financieras internacionales, así como por una unidad sin precedentes entre las distintas facciones de la burguesía boliviana. Tal contexto permitió introducir por la fuerza en la sociedad boliviana un capitalismo de «mercado libre» cuyas consecuencias sociales fueron devastadoras.

La izquierda, devastada por la desmoralizadora persecución de sus estructuras partidistas, movimientos sociales y bases sindicales llevada a cabo por el Gobierno de la UDP, no pudo proyectar ninguna alternativa política, social ni económica al asalto neoliberal. En 1985 se puso el último clavo al ataúd de las fuerzas populares. Ese año se hundió el precio internacional del estaño, lo cual destruyó a los mineros que lo extraían y que habían sido la vanguardia de la izquierda boliviana desde la revolución de 1952. Representaban la espina dorsal de la Central Obrera Boliviana (COB), de extraordinaria radicalidad y militante independencia.

Cuando el precio del estaño tocó fondo, los protagonistas neoliberales del Estado aprovecharon la oportunidad para privatizar las minas, con lo que forzaron a casi 30.000 mineros a «recolocarse» y encontrar medios de subsistencia en las ciudades (incluido El Alto) o en la región del Chapare, donde se cultivan las hojas de coca para la exportación. Los mineros siguieron con sus protestas, pero débilmente y sin producir impacto alguno. La vanguardia de la izquierda se desplazó a los cocaleros, que, debido al acoso y la represión constantes de la «guerra contra la droga» dirigida por los Estados Unidos, desarrollaron una impresionante orientación ideológica antiimperialista, imbuida del marxismo revolucionario de los mineros recolocados y la política de resistencia india de los campesinos de Chapare. Este último aspecto del desarrollo ideológico de los cocaleros se iría refinando con los años y quedaría representado en el símbolo santificado de la hoja de coca y en el *wiphala*, la bandera multicolor de los indígenas.

Aunque los cocaleros protagonizaron una feroz lucha local contra el imperialismo y el proyecto neoliberal, y aunque llegarían a ser la base del partido más fuerte de la reconstituida izquierda boliviana, el Movimiento al Socialismo

(MAS), lo cierto es que su papel en la izquierda boliviana durante los años de 1980 y 1990 no tuvo ni remota semejanza con el papel jugado por el amplio e histórico movimiento de mineros. El periodo de hegemonía neoliberal, 1985-2000, representó sin lugar a dudas la derrota histórica de la izquierda y pareció inculcar profundos sentimientos de derrota en los sectores populares que, de lo contrario, habrían podido ejercer una cierta resistencia. Mientras tanto, otras figuras prominentes de la izquierda pasaron a trabajar con organizaciones no gubernamentales o se convirtieron lisa y llanamente al proyecto neoliberal.

La situación comenzó a cambiar a pasos de gigante en febrero-abril de 2000, con ocasión de la Guerra del Agua, de carácter rural-urbano y multiclasiista, que puso freno a la privatización del agua que exigía el Banco Mundial, al tiempo que expulsaba a un consorcio multinacional encabezado por la corporación norteamericana Bechtel. Encolerizada por los aumentos de tarifas y las leyes gubernamentales de privatización del agua, la gente, que procedía de distintos grupos sociales, como, entre otros, campesinos que se dedicaban a cultivos de regadío, comités del agua de los pobres de las ciudades y usuarios urbanos del agua, se coaligó bajo el paraguas del Comité Coordinador para la Defensa del Agua y la Vida, del que surgió el liderazgo de Oscar Olivera. Fue este uno de los dos momentos iniciales en el ciclo de rearticulación de las fuerzas indígenas de izquierda; el otro fue el de una serie de bloqueos de carreteras y de protestas en las comunidades aimaras del Altiplano durante el año 2000. La Guerra del Agua señaló la primera ruptura del tejido neoliberal que llevaba quince años en el poder, dejó al descubierto el fracaso del modelo económico a la hora de producir las maravillas que habían prometido diferentes gobiernos e inyectó al mismo tiempo vida y organización en el descontento social existente.

Al hablar de «rearticulación» de las fuerzas indígenas de izquierdas me refiero a los momentos históricos en que los explotados y los oprimidos reconocen conscientemente los elementos comunes de explotación clasista y de opresión racial y son capaces de organizarse para luchar por sus intereses. Explotados y oprimidos son siempre, pero sólo en contadas ocasiones resultan capaces de organizarse y movilizarse.

El periodo comprendido entre 2000 y 2005 constituye una rearticulación de las fuerzas populares en dos sentidos. En primer lugar, con el aplastamiento de los mineros en 1985 se cerró una fase de la lucha de la izquierda por el socialismo, cuyo origen se remontaba a la era revolucionaria de los años de 1950. En aquel momento, la izquierda en general no reconocía la opresión racial como componente significativo de la condición poscolonial boliviana. Mediante el nuevo ciclo de protesta que se inició con la Guerra del Agua en Cochabamba, las fuerzas populares se rearticulaban, esta vez con un nuevo reconocimiento de la opresión racial y un papel mucho más importante de los campesinos indios en su seno.

Por lo tanto, en un primer sentido, los años 2000-2005 asisten a una rearticulación efectiva de las fuerzas populares, puesto que en los quince años anteriores no se había producido ninguna resistencia popular seria al neoliberalismo. En 2000, de las cenizas de las luchas de los mineros nació una nueva izquierda. Pero, en un segundo sentido, y de mayor dimensión histórica, se trata de un periodo de rearticulación de los indios de izquierdas, porque en él se advierten al menos los inicios de un fructífero intercambio entre la ideología marxista y la indigenista, algo que no se veía en Bolivia desde la década de 1920.

La Guerra del Agua politizó los fracasos del programa de privatización de Goni, eufemísticamente apodado «capitalización», que no era otra cosa que la venta de bienes del Estado a precio de saldo, lo cual agravó la crisis financiera del Estado. Un elemento decisivo de esa capitalización fue la Ley de Hidrocarburos de 1996. En virtud de esa ley se privatizó el sector de los hidrocarburos (en particular el gas natural), lo que acabó con un recurso clave de ingresos del Estado. Consecuentemente, de 1997 a 2002 el nivel de préstamo de Bolivia aumentó del 3,3% al 8,6% de su PIB.² Las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) —cambios regresivos en la estructura impositiva y reducciones del gasto público para mitigar el déficit presupuestario— crearon las condiciones para nuevas crisis políticas.

Las elecciones generales de 2002 constituyeron el segundo signo clave de rearticulación de las fuerzas indígenas de izquierdas y, a la vez, de la crisis del Estado neoliberal. La era de democracia pactada se vio seriamente erosionada cuando el MAS, encabezado por Evo Morales, obtuvo el 21% de los votos populares, sólo por detrás del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Goni, derechista, que logró el 22%. Además, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), encabezado por el aimara radical Felipe Quispe, consiguió el 6% del voto popular y fue capaz de entrar en la liza electoral con una presencia arraigada en el Altiplano. Por primera vez, las fuerzas indígenas de izquierdas, cuyos candidatos eran campesinos indios, establecía una presencia considerable en la arena electoral, pese al triunfo de Goni.

La coyuntura crítica siguiente de crisis del Estado, tanto en términos financieros como de quiebra de su aparato coercitivo, ocurrió en febrero de 2003. Las desgracias financieras del Estado liberal continuaron a paso redoblado, y la condescendencia de la élite neoliberal boliviana con los caprichos de las instituciones financieras internacionales quedó más a la vista. El impulso boliviano a «privatizarlo todo», incluso el devastador saqueo de los hidrocarburos del país, tuvo en el FMI un propulsor decisivo. Como dijo Jim Schultz, «por complacer las exigencias de privatización del FMI, Bolivia terminó reduciendo su renta pública y empezó a adquirir déficit públicos cada vez mayores. Luego el FMI volvería a Bolivia y presionaría para que esta redujera esos déficit, no a expensas de las corporaciones extranjeras, sino de los trabajadores pobres del país».³

A principios de 2003, el FMI anunció que la concesión de nuevos préstamos dependía de que el Gobierno redujera su déficit presupuestario del 8,7 al 5,5% de su PIB en un año mediante una combinación de recortes del presupuesto y aumentos fiscales por un valor total de 250 millones de dólares.⁴ En respuesta, el 9 de febrero de 2003 se anunció un nuevo paquete de impuestos que desplumaba a los trabajadores pobres.

En ese momento, las fuerzas policiales, mal pagadas, estaban comprometidas en una brutal disputa con el Gobierno sobre salarios impagados y demandas de aumentos de salario. Una compleja serie de acontecimientos condujo a una revuelta de la policía que tuvo su centro en la plaza Murillo y fue rápidamente contraatacada por fuerzas militares leales a Goni y al Estado neoliberal. Junto a la policía, los sectores populares se unieron a las manifestaciones, con la participación principal de jóvenes activistas estudiantes. En esos acontecimientos murieron treinta y cuatro personas.⁵

La crisis del Estado no podía ser más clara. La policía y los militares —los dos brazos de la coerción estatal— se tirotearon frente al Palacio Presidencial en medio de una crisis financiera producida por las políticas neoliberales, la creciente sumisión a los dictados del FMI y el derramamiento de sangre en las calles. Juntos, estos factores encendieron el fuego del descontento y el agravio entre los movimientos sociales progresistas que volvían a reagrupar sus fuerzas.

Tanto la reorganización de los indígenas de izquierdas como la crisis del Estado liberal llegaron a su culminación con la Guerra del Gas de septiembre-octubre de 2003. Brevemente, los actores eran: los campesinos aimaras del Altiplano, con una serie de demandas ligadas a la autonomía indígena y a la reivindicación de su presencia y su dignidad en el Estado racista boliviano; los mineros de Huanuni; contestatarios urbanos de El Alto, con fuertes conexiones con las luchas de los campesinos indígenas aimaras y los antiguos mineros recolocados; los sectores pobres de La Paz, y, por último, los paceños de clase media, disgustados por la violencia del Estado bajo el gobierno de Goni. Finalmente, en todo el territorio del Estado boliviano, tanto en las ciudades como en el campo, se produjeron gran multitud de marchas solidarias y otras formas de protesta.

Las motivaciones de la revuelta eran muy variadas y complejas, pero el catalizador esencial de todas ellas fue el acuerdo con un consorcio internacional para exportar el gas natural a Estados Unidos a través de Chile. La matanza de activistas indígenas que realizó Goni en el Altiplano, El Alto y La Paz elevó los niveles de unidad y agravio, a la vez que proporcionó un objetivo más claramente perceptible. El 17 de octubre de 2003, Goni y su círculo más cercano huyeron al exilio en Estados Unidos, lo que permitió a Mesa asumir el poder a través de mecanismos constitucionales. De esa ola de movilización y de represión estatal surgió la Agenda de Octubre.

Los acontecimientos de octubre de 2003 pusieron de manifiesto el profundo abismo entre los sentimientos populares y los ideales neoliberales en el seno del Estado boliviano. Mostraron la absoluta incapacidad del Gobierno de Goni para gobernar por consenso, así como la debilidad del Estado neoliberal al apelar a la coerción más extrema, cuyo resultado fue la muerte de más de setenta manifestantes desarmados. También quedó clara la capacidad de movilización del pueblo del Altiplano y de El Alto y la unidad ideológica de la lucha indígena de raíz aimara con las más antiguas tradiciones de izquierda. Al mismo tiempo, la asunción del poder por parte de Mesa reflejaba la debilidad de la organización *política* de las fuerzas populares de octubre y las divisiones en el campo de la izquierda indígena, demasiado predominantes salvo durante los episodios de crisis grave.

El régimen de Mesa después de octubre: un mapa de las fuerzas sociales

Aunque Mesa visitó El Alto inmediatamente después de asumir el poder y aseguró a las masas que proseguiría con la Agenda de Octubre, muy pronto dio muestras de su verdadera orientación política. A pesar de que la retórica de Mesa establecía tajantes diferencias entre su posición y la de Goni, lo cierto es que la continuidad entre su política económica y social y la de su predecesor no pudo ser más profunda.

En todas las cuestiones importantes para los sectores populares que con tanta valentía se habían levantado y le habían permitido asumir el poder — política macroeconómica, fiscal, de hidrocarburos, tratamiento de campesinos indígenas pobres y sin empleo, las negociaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos y el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de las Américas—, Mesa actuó en nombre de los poderes imperiales y las secciones de la burguesía boliviana de orientación capitalista internacional. Su gabinete, como era lógico, estaba plagado de ministros gonistas.

Mientras, el MAS, tras no desempeñar prácticamente ningún papel en la insurrección de octubre, tampoco respondió a las oportunidades históricas que se presentaron con posterioridad a ella. En lugar de continuar con la movilización existente y la política de calle en solidaridad con las fuerzas populares radicales movilizadas, optó por cooperar con el régimen de Mesa, aceptar el discurso de este desentendiéndose de su práctica y centrarse en su incoherente estrategia de seducir a las clases medias urbanas con la esperanza de ganar las elecciones presidenciales de 2007.

El abismo entre la sofisticación televisada de Mesa y la realidad de su acción efectiva de gobierno no podía prolongarse mucho tiempo. La luna de miel acabó en enero de 2005 con la irrupción de la Segunda Guerra del Agua de Bolivia, con base en El Alto. Los alteños organizaron una huelga general de 72

horas en El Alto a través de la estructura organizativa de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE-El Alto), que, junto con la Central Obrera Regional de El Alto (COR-El Alto), había sido una institución clave en la insurrección de octubre de 2003. Los huelguistas pedían la expulsión inmediata de Aguas del Illimani (el consorcio privado controlado por la multinacional francesa Suez) y su sustitución por una nueva compañía de aguas, sin ánimo de lucro y bajo control social. La FEJUVE comenzó también a expresar una política que ligaba su frustración en esta cuestión con el fracaso de Mesa en el cumplimiento de la Agenda de Octubre en general. Prudentemente, Mesa no sacó los cañones a la calle contra los huelguistas y, en cambio, promulgó un decreto que ponía fin al contrato firmado con Aguas del Illimani en 1997.

La abstención del uso de la violencia por parte de Mesa, junto con las efectivas tácticas de movilización de los manifestantes y su éxito en la recolocación de los problemas de la nacionalización del gas y la Asamblea Constituyente en la esfera pública, dieron lugar a la resurrección de las fuerzas sociales de extrema derecha. Estas tenían su base ante todo en el departamento de Santa Cruz, pero se extendían a los de Tarija, Beni y Pando. El discurso público en esta materia enfrenta a la zona este del país (Santa Cruz) con el oeste (sobre todo La Paz).

Comenzaron a surgir con más fuerza los llamamientos a la «autonomía» (demanda histórica de la región de Santa Cruz, que en la actualidad ha quedado impregnada de sentimientos populistas de extrema derecha). Dos prominentes intelectuales bolivianos de izquierda, Walter Chávez y Álvaro García Linera, describen la ideología burguesa del descontento de los cruceños como la ideología del «mercado libre, la inversión extranjera, el racismo, etc.», que opone a la élite «moderna» y «blanca» de Santa Cruz frente a los pueblos aimara y quechua, bajos, de piel oscura, atrasados y anticapitalistas, de la región occidental de Bolivia, sobre todo en el departamento de la Paz.

Durante tres semanas, la élite cruceña renovó sus demandas de autonomía a la cabeza de una serie de protestas de derechas con apoyo popular en contra del «centralismo» de La Paz, que culminaron en huelgas de hambre, ocupaciones de edificios públicos y el cierre del aeropuerto internacional de Santa Cruz. Esta movilización llegó a su apogeo en una marcha que sacó a la calle a 300.000 personas. Su «Agenda de Enero» se oponía a la Agenda de Octubre de los indios de izquierdas. La Agenda de Enero trataba de proteger los derechos de la propiedad privada, el control privado de los depósitos de petróleo y de gas natural en las zonas orientales y sureñas del país.

Sin embargo, para Chávez y García Linera, el hecho de que la élite cruceña haya optado por regionalizar sus luchas actuales en vez de tomar como escenario el Estado a nivel nacional apunta a una paradoja: bajo la bandera de la autonomía regional, la élite cruceña daba muestras de una capacidad de organización y de un vigor desconocidos desde el avance popular de la rebelión de

octubre; no obstante, durante el periodo de hegemonía neoliberal (1985-2000), esa misma élite había disfrutado de acceso irrestricto al poder del Estado nacional gracias a las posiciones clave que ocupaba en los principales partidos neoliberales comprometidos con la democracia pactada. Que la élite se limitara a reclamar únicamente la «autonomía» de Santa Cruz da muestra de la debilidad de la extrema derecha frente a los movimientos populares del Altiplano y El Alto.⁶

Al mismo tiempo que el fervor de Santa Cruz se retiraba a un segundo plano, el Alto comenzaba a resurgir. A finales de febrero de 2005, cuando todavía no se había establecido una fecha para la expulsión de Aguas del Illimani, la FEJUVE-El Alto anunció una huelga general que empezó el 2 de marzo. Tras un comienzo débil, la huelga general cobró fuerza y paralizó El Alto al cerrar las carreteras decisivas entre La Paz y el resto del país. Mientras tanto, en muchos departamentos los campesinos y otros sectores sociales comenzaron a bloquear carreteras para exigir el cumplimiento de la Agenda de Octubre y, en menor medida, expresar su solidaridad con los huelguistas alteños.

Con varias propuestas de una nueva ley de hidrocarburos en el Congreso, el MAS parecía comenzar a alejarse de su actitud conciliadora con Mesa, como ponían en evidencia los llamamientos de Evo Morales, junto con Oscar Olivera, a favor de una ley de hidrocarburos más próxima a satisfacer la exigencia de nacionalización surgida de la Guerra del Gas de 2003. El país se paralizaba y la viabilidad del Estado neoliberal volvía a quedar en cuestión. Hubo sectores de derechas que empezaron a reclamar que se «liberaran las carreteras», que se permitiera la práctica del comercio. Despojado de su ropaje orwelliano, eso quería decir: «descabezad y aplastad a los movimientos sociales».

Incapaz de usar la fuerza letal contra los movimientos populares y, en apariencia, renuente a hacer tal cosa, Mesa optó la tarde del domingo 6 de marzo de 2005 por dirigir por televisión al país un discurso de «dimisión». En él se destacaban los innumerables males de los movimientos sociales y lo inevitable y deseable de capitular ante el capital global y las fuerzas imperialistas. A la mañana siguiente presentaba ante el Congreso su dimisión revocable, que el Congreso rechazó. Mesa, que contaba con ese resultado, reconfiguró su coalición y quemó el puente hacia la izquierda que había constituido el MAS.

El giro de Mesa a la derecha condujo a una breve rearticulación de una amplia unidad de izquierdas, incluido el MAS. Mesa dio un giro y amagó otro movimiento político con la solicitud al Congreso de que anticipara las elecciones presidenciales previstas para 2007. Una vez más, eso fue rechazado por el Congreso, y Mesa prometió permanecer en el poder hasta que finalizara su mandato constitucional. Denigró públicamente a todas las fuerzas populares como «no democráticas». Pasó por alto el hecho de no haber sido nunca elegido presidente y que la única razón por la que había asumido el cargo era que los movimientos sociales se lo habían permitido en octubre de 2003. El único

rasgo distintivo entre Goni y Mesa residía en la diferencia de sus respectivas actitudes ante el uso de la fuerza mortífera contra civiles desarmados.

La segunda Guerra del Gas: mayo-junio de 2005

En los primeros días de junio de 2005, Bolivia se hallaba encerrada en lo que el historiador y activista Forrest Hylton describió como la «agonía del punto muerto». Es el último capítulo de lo que a mi juicio constituye el momento dividido, pero real, del resurgimiento de las fuerzas indígenas de izquierdas, que, sin embargo, carecen todavía de proyecto político como para apoderarse del poder. En consecuencia, a la hora de enfrentarse a un proyecto neoliberal en crisis, las fuerzas populares que hay detrás de la Agenda de Octubre se encuentran divididas y su capacidad política es limitada en la actual coyuntura, aun cuando mantienen niveles espectaculares de continuas y activas movilizaciones en la calle. Eso es lo que ha puesto de manifiesto la segunda Guerra del Gas en Bolivia desde su inicio, el 16 de mayo de 2005.

Ese lunes 16 de mayo de 2005 participé en una marcha multitudinaria de decenas de miles de manifestantes procedentes de El Alto que bajaban por las faldas de La Paz hacia la plaza Murillo en el primero de los enfrentamientos entre policía y activistas que se producirían durante semanas, al comienzo de forma esporádica y luego constantemente.

Entre las muchísimas organizaciones que participaron en las acciones de aquel día se hallaban la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Central Obrera Departamental de El Alto, la Confederación de Pueblos Originarios, la Federación de Campesinos de La Paz (Tupaj Katari), la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos de maestros de El Alto y La Paz.

Mientras recorríamos el camino de protesta de El Alto a La Paz —tres horas de marcha a lo largo de once kilómetros—, los cánticos de los movilizados, junto con una serie de conversaciones y entrevistas, iban expresando las demandas fundamentales del día que, en orden decreciente de importancia, eran: nacionalización del gas, el cierre del Parlamento, como demostración de poder y de decisión de las fuerzas populares, y la renuncia de Mesa. En las semanas siguientes, a medida que la segunda Guerra del Gas se iba desarrollando, se agregarían a la lista de las demandas del 16 de mayo los temas más antiguos de octubre: la convocatoria inmediata de una Asamblea Constituyente y, aunque menos importante, un juicio a Goni y a su banda asesina de aliados más próximos. Como sugirió un trabajador que marchaba cerca de mí, el tema común de esas demandas era la búsqueda popular de dignidad: «El Gobierno ha estado del lado de las transnacionales y los ricos. Queremos un Gobierno del lado del pueblo». Las conversaciones entre los manifestantes pusieron en evidencia que ya pensaban en la posibilidad de otro Octubre.

A la una de la tarde del 17 de mayo de 2005, Mesa proporcionó el combustible necesario para hacer estallar el incendio de las fuerzas sociales que competían con el Estado boliviano, con todas sus complejidades de índole regional, de clase y étnica. A esa hora se dio a conocer que el presidente ni promulgaría ni vetaría la discutida ley de hidrocarburos que el Congreso había aprobado diez días antes. La «decisión» de Mesa, de acuerdo con la Constitución, significaba que el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, estaba obligado a promulgar la ley, lo que hizo de inmediato. La nueva ley de hidrocarburos proporcionaba royalties del 18% en boca de pozo y un 32% de impuesto directo sobre los hidrocarburos, anuncio que distaba mucho de la nacionalización que pedían las fuerzas populares de El Alto y del Altiplano. En la Asamblea de la FEJUVE-El Alto de aquella tarde, los espíritus beligerantes estaban exaltados y se trazaron planes para renovar la lucha de una manera coordinada y efectiva.

Mientras tanto, bajo el paraguas del MAS, se planeaba otra marcha de Caracollo a La Paz de 200 kilómetros y cuatro días de duración, lo que expresaba una vez más la división en el seno de los movimientos radicales y populares y el papel del MAS en esa coyuntura política. Toda una serie de organizaciones implicadas en el Pacto de Unidad acordaron marchar conjuntamente con el MAS, no a favor de la nacionalización, sino de royalties del 50% en lugar del 18% que fijaba la nueva ley. También exigían, con más fuerza esta vez, un plan para convocar la Asamblea Constituyente.

El 23 de mayo de 2005, la marcha encabezada por el MAS llegó a El Alto. Los manifestantes fueron recibidos por los sectores populares organizados de El Alto que reclamaban la nacionalización. Muchos de los manifestantes dirigidos por el MAS respondieron a los alteños que estaban de acuerdo con la «nacionalización». Sin embargo, Evo Morales se mantendría a distancia de los sentimientos de la base. Después, esa misma tarde, tuvo lugar un gran mitin con discursos y vítores en la plaza de los Héroes, en el centro de La Paz. En esa fase estaba clara la división en los movimientos, sobre todo en el llamamiento de Evo Morales a una Asamblea Constituyente por encima de todo y su rechazo al cierre forzado del Parlamento, la dimisión de Mesa y la nacionalización del gas natural, mientras Jaime Solares (líder de la COB), entre otros, exigía la nacionalización del gas, el cierre del Parlamento y la dimisión de Mesa. Solares apelaba a los ejemplos de Venezuela y de Cuba para animar a la multitud. El día siguiente estuvo lleno de enfrentamientos cada vez más intensos entre, por un lado, los campesinos aimaras y los activistas mineros y, por el otro lado, la policía, cuando los manifestantes trataron de entrar en la plaza Murillo y cerrar el Palacio Presidencial. El 30 y el 31 de mayo fueron los días de mayores movilizaciones desde octubre de 2003.

Cuando llega a su fin la primera semana de junio, La Paz está prácticamente vacía de turistas, pues las embajadas extranjeras aconsejan a sus ciudadanos que eviten viajar a Bolivia, los rumores de golpes militares son tema diario de con-

versación y el aprovisionamiento de gas natural se está agotando en La Paz debido a la huelga general de El Alto y varios bloqueos de carreteras, a la vez que la situación política del país se encuentra en un tenso e incierto punto muerto.

En la televisión se ha visto a dos oficiales del ejército que abogaban por la constitución de un gobierno cívico-militar de izquierdas para cumplir con la Agenda de Octubre y reemplazar al régimen de Mesa. Aparentemente, sin embargo, contaban con escaso apoyo de las fuerzas armadas y de los movimientos sociales. Ciertos sectores de las fuerzas policiales han comenzado a sugerir públicamente, mediante llamadas telefónicas a estaciones de radio populares, su intención de negarse a seguir arrojando bombas de gas a mujeres y niños en la calle. Por ahora no está claro en qué medida ha calado dicho sentimiento en las fuerzas policiales. Importantes asociaciones empresariales de Santa Cruz y La Paz reclamaron a Mesa que, dada la ingobernabilidad del país, adelantara las elecciones. El movimiento por la autonomía de Santa Cruz está ganando fuerza nuevamente. Al mismo tiempo, un grupo fascista juvenil, que el MAS señala como ala militar del Comité Cívico de Santa Cruz, ha agredido violentamente a manifestantes campesinos indígenas en ese departamento.

Mesa sigue sin emplear la fuerza mortal, aun cuando la plaza Murillo está permanentemente defendida por barricadas con centenares de hombres de la policía militar, mientras que el intercambio de dinamita, gases lacrimógenos y balas de goma entre las fuerzas policiales y los manifestantes continúa impregnando la vida cotidiana. La salida del actual punto muerto dista mucho de ser clara. Con todo, es evidente que los problemas que en octubre de 2003 quedaron sin resolver están resurgiendo en diversas y poderosas formas y que no es probable que desaparezcan mientras el colonialismo racista interno y la feroz explotación capitalista e imperialista que caracteriza a la Bolivia contemporánea no sean eliminados. Desafortunadamente, en la actual coyuntura las fuerzas populares —pese a su capacidad de movilización— permanecen divididas y sin un proyecto político coherente para sustituir al *Ancien Régime*.

Epílogo

Durante las movilizaciones de mayo-junio se produjeron cortes de carreteras en los nueve departamentos de Bolivia. El Alto, bajo la dirección de la FEJUVE-El Alto, lanzó y sostuvo con éxito una huelga general de tres semanas en todo el suburbio de chabolas que bloqueó las carreteras de acceso a La Paz. Los precios de los artículos básicos de alimentación se elevaron y en la capital se agotó efectivamente el aprovisionamiento de gasolina y de gas natural. Por añadidura, durante el periodo de movilización la planta de gasolina de Senkata, en El Alto, estuvo rodeada de barricadas y bajo control de los huelguistas las veinticuatro horas del día.

Grupos de indígenas de la parte oriental del país —históricamente menos radicales e independientes que los del Altiplano— ocuparon los yacimientos petrolíferos y de gas para cortar el suministro de esos recursos en solidaridad con las luchas que terminaron por extenderse a toda la nación.

El 6 de junio de 2005, los manifestantes llegaron a sumar entre 300.000 y 500.000 en La Paz, ocupación extraordinaria de la ciudad con un espíritu decididamente revolucionario en el aire. Mesa no pudo seguir ignorando las voces de las «minorías» que lo hostigaban y le impedían su regulación neoliberal del capitalismo en Bolivia. Esa tarde anunció su dimisión, que, según la Constitución, tiene que ser aprobada por el Congreso. En esa fase de parcial victoria popular fue cuando, del modo más clamoroso, se puso de manifiesto la ausencia de estrategia del poder popular entre las fuerzas indígenas de izquierdas. Mesa se había marchado. ¿Qué vendría luego?

Durante un tiempo, las facciones conservadoras del sistema de partidos — el MNR, Acción Democrática Nacional (ADN), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Nueva Fuerza Republicana (NFR)— habían urdido un plan para llenar el vacío de poder que seguramente se produciría como consecuencia del creciente debilitamiento del Gobierno de Mesa. De acuerdo con la Constitución, después de que el 6 de junio Mesa anunciara su dimisión revocable, el Congreso podía permitir al presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, del MIR, que asumiera la presidencia. Si no era aceptado o si declinaba la invitación, el siguiente en la línea sucesoria sería el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, del MNR. Por último, si se prescindía de ambos, ocuparía la presidencia de la nación el presidente del Tribunal Supremo, Eduardo Rodríguez.

Rápidamente se convocó para el 9 de junio una sesión especial del Congreso en Sucre, y no en La Paz, con el fin de evitar las manifestaciones. Comenzaba la segunda fase del drama. Era para todos evidente que la derecha se estaba uniendo en torno a Vaca Díez. La izquierda respondió exigiendo que se prescindiera de Vaca Díez y de Cossío y que, en cambio, se llamara a asumir la presidencia a Rodríguez, de quien se esperaba que convocara elecciones generales de inmediato.

Las fuerzas populares —las más importantes de las cuales eran las de los campesinos y los mineros— movilizaron a millares de individuos para acudir a Sucre a impedir la toma de poder de Vaca Díez. En el seno del Congreso, el MAS y el MIP también se opusieron al plan de Vaca Díez y, en consecuencia, se sumaron de momento a las fuerzas populares en las calles y en el campo.

No obstante, que Vaca Díez se repusiera y consiguiera el apoyo de la mayoría del Congreso era una posibilidad nada remota. Pero, de golpe, esa posibilidad desapareció cuando los choques entre mineros y policías en Yotala —a 18 kilómetros de Sucre— crearon el primero y único mártir de los días de mayo y junio, el minero Carlos Coro. No había duda de que el país ardería en llamas si

Vaca Díez alcanzaba el poder. En consecuencia, el 9 de junio el NFR retiró su apoyo a Vaca Díez en el Congreso, lo que imposibilitó la feliz culminación del plan de la derecha. Se proclamó presidente de la República a Rodríguez.

El contexto actual

No cabe duda de que en los días de mayo y junio se asistió a un impresionante despliegue de política radical desde abajo que terminó con el vergonzoso espectáculo del Gobierno de Mesa y, posteriormente, puso fin al proyecto contrarrevolucionario que entrañaba el intento de colocar a Vaca Díez en la presidencia.

Sin embargo, la nacionalización del gas, que fue la exigencia en torno a la cual se unieron toda una gran diversidad de luchas, ha quedado fuera de la agenda política manifiesta. Eso supone una importante derrota popular, al menos por el momento. Rodríguez, probablemente más reaccionario que Mesa, es ahora presidente hasta que se celebren las elecciones, el 4 de diciembre de 2005. La derecha está tratando de reorganizarse a través de la política electoral, lo que resulta particularmente perceptible en el caso del ex presidente Jorge Quiroga y su Alianza para el Siglo XXI. A pesar de la incompetencia de la derecha en general y de la falta de legitimidad de sus viejos partidos —MNR, ADN, MIR—, esta cuenta con grandes apoyos entre la población del país. En efecto, el sistema de los Estados imperiales, los sistemas financieros internacionales y las corporaciones transnacionales que operan en Bolivia son los puntales de la estabilidad neoliberal. En otras palabras, si la izquierda no toma el poder, es casi como si la derecha ganara por incomparencia de su adversario.

Mientras, Evo Morales está cometiendo su propio suicidio político y tratando de atraer a todos los cuadros de la izquierda. En la última reunión general del MAS del 17 de junio en Cochabamba, las bases del partido pidieron que los líderes organizaran un frente con las fuerzas sociales movilizadas del país. En lugar de esa orientación política de principios y con fundamento estratégico, Evo Morales anunció —aproximadamente una semana después de la reunión con las bases— que había llegado a un acuerdo preliminar para formar un frente electoral común con el Movimiento sin Miedo (MSM), dirigido por el alcalde de La Paz, Juan del Granado.

El MSM es un partido que se pronunció contra la nacionalización del gas, gobernó el municipio de La Paz como una fuerza neoliberal, se embarcó en hostilidades contra el movimiento de El Alto en 2005 por la expulsión de la compañía internacional Aguas de Illimani y el establecimiento de un sistema hídrico público bajo control social y, por último, se alió con el régimen de Mesa. En verdad, Granado ha declarado públicamente que el frente, que supuestamente está contra el neoliberalismo, no puede impedir que Mesa regrese a la política como miembro de su equipo.

Hasta ahora, la izquierda del movimiento social sólo ha sido capaz de expresar su frustración ante la degeneración de Morales en un político «tradicional». La FEJUVE-El Alto ha discutido vagamente la posibilidad de crear un instrumento político autónomo, como ha hecho la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, hasta ahora, la derecha apuesta por una victoria en diciembre por ausencia de contrincante, y Morales y el MAS, al abandonar tanto los vínculos con el pueblo radicalizado y sus propias bases partidarias, como la dirección de uno y otras, contribuyen a aumentar la probabilidad de que eso ocurra.

Notas

1. Los cálculos de muertos y heridos en los acontecimientos de septiembre-octubre de 2003 son diversos. En *Agonía y Rebelión Social* (La Paz y Cambridge, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2004), Edgar Ramos Andrade sostiene que hubo 73 muertos y 470 heridos.
2. Jim Schultz, *Deadly Consequences: The International Monetary Fund and Bolivia's «Black February»*, Cochabamba, The Democracy Center, 2005.
3. Schultz, *Deadly Consequences*, p. 16.
4. Schultz, *Deadly Consequences*, p. 18.
5. Schultz, *Deadly Consequences*, p. 18.
6. Walter Chávez y Álvaro García Linera, «Rebelión Camba: Del dieselazo a la lucha por la autonomía», *El Jugete Rabioso*, 23 de enero de 2005.